



Ley No. 1289
Código de Familia

LEY No. 1289
Código de familia

Revisión técnica:
MSC. GUILLERMO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ



La Habana, 2015

Edición y corrección: Lic. Niurka Casanovas Herrero
Diseño interior y de cubierta: René Alfara Leyva
Emplane digital: Yohanka Morejón Rivero

© Sobre la presente edición:
Organización Nacional de
Bufetes Colectivos, ONBC, 2015

Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra,
por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización
expresa de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

ISBN 978-959-7234-24-1

Obra editada por:
Ediciones ONBC
Colección Textos Legales
Calle 41 No. 7208, esquina 72, Playa
La Habana, Cuba
Teléfono: 7214-4208
E-mail: jsuperacion@onbc.cu

Presentación

En Cuba rige desde hace ya cuatro décadas un Código de Familia (Ley No. 1289 de 14 de febrero de 1975), siendo objetivo de esta introducción necesaria, aportarles a los lectores una síntesis que facilite el conocimiento y análisis de esa norma, la cual constituye una de las más importantes leyes vigentes en nuestro país y que a todos atañe.

El mayor interés de estas notas es que, en definitiva, sirvan de orientación sobre su contenido y de su utilidad práctica.

¿Qué motivó la promulgación de un Código de Familia en Cuba? ¿Qué de singular hay en ello?

Antes del año 1975 regía en Cuba legalmente para las relaciones familiares el Código Civil español vigente en España desde el 24 de julio de 1889, hecho extensivo a nuestro país el 5 de noviembre de ese propio año. Ello por sí solo hace suponer al lector actual del siglo XXI que su texto estaría francamente desfasado de la realidad existente en suelo patrio posterior a 1959, pues contenía reglas ya obsoletas y contrarias al principio de igualdad, discriminatorias de la mujer y de los hijos nacidos fuera del matrimonio.

En el orden interno eso significó adecuar la vieja Ley a los nuevos cambios en la vida familiar y conformarlos de forma amena, de fácil lectura, comprensión y justa aplicación.

En lo externo nos convertimos en el tercer país de América Latina (solo precedidos por Bolivia en 1972 y Costa Rica en 1973) en promulgar este tipo de ley de contenido familiar, que además fue sometido a consulta popular en un

verdadero ejercicio democrático, y de ahí surgió un Código auténticamente cubano, sin dejar de reconocer y aplicar acorde con nuestra realidad social, toda la experiencia anterior en Cuba y el mundo, lo que demuestra la importancia que nuestro Estado le atribuye a esta materia.

Se considera por los estudiosos del tema que nuestro Código en su momento, a solo 16 años del triunfo de la Revolución, y la apertura de una nueva era para el pueblo cubano, fue de los más avanzados para su época y aun cuando ya desde hace varios años se estudian varias modificaciones que respondan a la evolución de nuestras relaciones sociales y familiares, es bueno reconocer que en determinados aspectos se adelantó a lo que posteriormente serían principios esenciales, como los de prioridad en la atención a la niñez, concebidos años después en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 18 de diciembre de 1979 y la Convención de los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989, ambas de las Naciones Unidas.

¿Qué fines persigue la promulgación de normas codificadas en materia familiar?

Desde su promulgación quedaron fijados los objetivos que se trazaba la nueva Ley consistentes en la contribución desde su aplicación, al fortalecimiento de la familia y de los vínculos de cariño, ayuda y respeto recíprocos entre sus integrantes, al fortalecimiento del matrimonio legalmente formalizado o judicialmente reconocido, fundado en la absoluta igualdad de derechos de hombre y mujer; al más eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a la protección, formación moral y educación de los hijos para que se desarrollen plenamente en todos los aspectos y como dignos ciudadanos de la sociedad socialista y a la plena realización del principio de la igualdad de todos los hijos.

¿Qué instituciones regula el Código de Familia? ¿Qué utilidad práctica reporta su conocimiento para el ciudadano común?

No es posible por razones de espacio pretender abordar de forma exhaustiva cada una de las instituciones que regula el Código, pero sí les proponemos un adecuado y elemental acercamiento a ellas para alcanzar una visión integral de estas.

Como base esencial para la conformación de la familia tenemos la institución del matrimonio (unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común). A esto se dedica la parte inicial del Código.

La formalización del matrimonio exige que el hombre y la mujer hayan cumplido los 18 años de edad con plenitud de uso de sus facultades mentales.

Excepcionalmente se autoriza a los varones con 16 años de edad cumplidos, y a las hembras con 14 años cumplidos con la anuencia conjunta del padre y la madre, o uno solo de ellos si el otro hubiere fallecido o estuviere privado de la patria potestad.

De no existir los padres legales de esos jóvenes contrayentes, también pudieran dar la autorización los adoptantes cuando el menor hubiese sido adoptado; el tutor, si el menor estuviese sujeto a tutela; o los abuelos maternos o paternos, indistintamente, prefiriéndose a aquellos que convivan en el mismo domicilio con el menor, y de manera general uno solo de los facultados, cuando el otro que deba darla conjuntamente con él se vea impedido de hacerlo.

Por último, podría autorizar el matrimonio en estos casos especiales, el tribunal municipal, si por razones contrarias a los principios y normas de la sociedad socialista, se negaren a otorgar la autorización, las personas facultadas para ello.

El acto de formalización se realiza ante un funcionario facultado para ello (Notario Público, Registrador del Estado Civil, Cónsul o Vicecónsul de Cuba en el extranjero).

Es muy probable que buena parte de los lectores haya contraído matrimonio en algún momento de su vida o bien haya asistido a la boda de algún familiar, amigo o conocido, en calidad de testigo o de simple invitado; y de haber estado presente en la ceremonia, ha escuchado la lectura que a modo de ritual se repite en estos casos con la citación por parte del funcionario actuante, de varios artículos del Código de Familia donde se hace particular referencia a los deberes y derechos que asumen los novios devenidos en esposos a partir de la conclusión del acto.

Este ceremonial, no exento en ocasiones del humor criollo respecto a los contrayentes, es, sin embargo, un acto de altísima responsabilidad personal y social, que es esencial para el éxito del nuevo matrimonio y de la familia.

Además de los requisitos que se necesita para llegar a él, también el Código dedica dos artículos a las prohibiciones para contraer nupcias, entre las que se incluyen los lazos entre determinados parientes, los que aún no han disuelto legalmente un matrimonio anterior, los enajenados mentales, etcétera.

Particular y a veces controversial resulta la inclusión de la posibilidad del reconocimiento ante los tribunales de las uniones entre hombre y mujer haciendo vida marital en común bajo el mismo techo, pero sin formalizar, o que al momento de la formalización manifiestan su interés en que se reconozca también la relación como esposos, la cual ya llevan desde tiempo antes al día del acto, lo que se conoce más popularmente como matrimonio retroactivo.

Cuando el interesado pretende que se reconozca hacia atrás en el tiempo ese período como marido y mujer, puede ser bien “inter vivos” (entre personas vivas) o “post mortem” (habiendo fallecido el otro de los miembros de la

pareja), lo que tuvo su antecedente en el llamado matrimonio “equiparado” recogido con la Constitución cubana de 1940, además de que daba respuesta a las condiciones en que se encontraban muchas familias, sobre todo en los primeros años de la Revolución, que permitió regularizar y legitimar los derechos de esas parejas.

A continuación se regulan las consecuencias que se derivan del matrimonio, como lo es la conformación de la comunidad matrimonial de bienes, es decir, como principio, salvo algunas excepciones puntuales que la Ley establece, todos los bienes y derechos que adquieren los cónyuges mientras dure la relación formalizada son de ambos, por tanto, tienen una sola forma de constituirse y lo es bajo el modelo de integración y de administración conjunta, con independencia de los ingresos monetarios de cada cual, quedando protegido aquel miembro de la pareja que por razones diversas, incluida el dedicarse a las tareas domésticas, no pueda aportar de otra manera a la comunidad que han creado.

En caso de la futura disolución de esa comunidad, la Ley introdujo, apegado al principio de igualdad y de protección a las niñas y niños de esa unión, que el tribunal está facultado para disponer que determinados bienes domésticos de propiedad común que considere necesarios o convenientes para la educación y desarrollo de los hijos menores, se adjudiquen en propiedad preferentemente al cónyuge a cuya guarda y cuidado queden los infantes (aquí pueden reportarse como ejemplos ciertos equipos electrodomésticos que contribuyan a esos fines).

Quedan establecidas las formas de extinción del matrimonio, siendo una de las de mayor presencia, el divorcio, donde el legislador patrio reguló que podía ser por dos vías: una, de mutuo acuerdo de los cónyuges, que a su vez puede ser ante Notario Público compareciendo a la misma vez ambos miembros de la pareja, o ante el tribunal; y la otra variante es por justa causa, siempre ante los tribunales y mediante representación de un abogado, para

demostrar que ya el matrimonio ha perdido todo su sentido para los esposos, para los hijos menores si los hubiere, y con ello también para la sociedad.

Ya en este punto es menester recordar que la disolución en sí del vínculo matrimonial no constituye en la realidad cubana ningún problema en lo formal, es decir, en el trámite para el interesado, pero sí es objeto de particular preocupación, de haberse procreado hijos menores de edad, lo relativo al ejercicio de la patria potestad, la guarda y cuidado de esos infantes, el régimen de comunicación con el progenitor que no se queda viviendo con los niños, así como la pensión alimenticia.

El ejercicio de la patria potestad lo forman un conjunto indelegable e irrenunciable de obligaciones de los padres para con sus hijos menores en la salvaguarda y protección de los intereses de estos en todas las esferas de su vida personal, espiritual, y de sus bienes, que surge desde el nacimiento de los pequeños y su inscripción en el Registro del Estado Civil, y a su vez el derecho de los hijos a comunicarse con sus ascendientes y ser debidamente atendidos por estos, conforme a los principios que en el Código se establecen, constituyendo pautas con un sólido seguimiento por parte de las instituciones públicas que tienen relación con esta temática.

Ninguno de los padres puede disponer de los bienes (entiéndase: venderlos, permutarlos, etc.) que estén a nombre de sus hijos menores de edad, como pudiera ser una vivienda, un automóvil u otros enseres, de forma libre, sin autorización previa del tribunal correspondiente.

El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones de los padres hacia sus hijos contenidas en el ejercicio de la patria potestad, tiene distintas consecuencias, con posible suspensión o privación de esta, pudiendo en determinados casos que lo requieran ser objeto de proceso penal por delito.

Ante la separación de los padres, se establece como regla que ambos conserven la patria potestad sobre sus hijos menores con iguales derechos y obligaciones para el padre y la madre.

Ahora bien, con el divorcio, uno solo de los excónyuges tendrá el derecho a tener bajo su guarda y cuidado al o los hijos pequeños, lo que supone el vivir con ellos bajo un mismo techo, tenerlos bajo su abrigo, pero no significa que el otro padre se desentienda de las obligaciones que el ejercicio de la patria potestad le impone, ni merma por ello su responsabilidad en la atención, educación, formación y manutención del hijo.

Eso sí, a falta de acuerdo entre la expareja, se dispondrá lo conveniente para que los menores mantengan la adecuada comunicación con el padre a quien no se otorgue la guarda y cuidado, lo cual consiste en dejar fijados los días y horarios en que se deberá visitar a los menores, con qué frecuencia y tiempo podrá sacarlos del hogar donde se hallen viviendo para compartir con ese otro padre, entre otros aspectos que son regulados convenientemente para que fluya sin dificultades el vínculo paterno-filial.

Para lo anterior se apreciarán múltiples factores como la edad de los pequeños, su estado de salud física y psicológica, las características del conflicto, la situación personal de los padres y sus familias, pero siempre velando por lo que resulte más beneficioso para el menor y, a su vez, podrá fijarse el monto de la pensión alimenticia que deberá aportarse por mensualidades adelantadas por el progenitor no guardador.

La forma de fijar estas pensiones a veces es objeto de dudas en la población, pero el Código se apoya en una fórmula que ha demostrado ser eficaz, y no se basa en tarifas, ni en tablas, ni reglas rígidas preestablecidas, sino que sencillamente el tribunal, aplicando un principio de proporcionalidad analizando caso a caso, hará una adecuación en correspondencia con los gastos y necesidades

normales de los hijos menores, así como con los ingresos de los padres (salarios, estipendios, pensiones, retribuciones diversas producto del trabajo, sea estatal, privado o cooperativo, etc.) a fin de establecer la cuantía y la responsabilidad de los progenitores en forma adecuada y que con el tiempo puede ir variando, bien aumentando el monto de la pensión o disminuyéndola conforme cambien las circunstancias de mayores o menores ingresos económicos de quien deba abonarla y de las variaciones en las necesidades de quien la recibe.

También es importante tener en cuenta que cuando el Código de Familia utiliza el término “alimentos”, no se refiere únicamente a dinero en efectivo que le pase un padre al otro todos los meses, sino también a todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de sustento, habitación y vestido, y en el caso de los menores de edad, también los requerimientos para su educación, recreación y desarrollo.

Otra de las instituciones y logros más trascendentes desde la vigencia del Código de Familia lo constituye el reconocimiento de los hijos, proscribiendo la discriminatoria diferencia de los recién nacidos en legítimos o ilegítimos, por lo que para el Estado y la sociedad, todos los hijos son iguales y disfrutan de iguales derechos, y tienen los mismos deberes con respecto a sus padres, hayan estado estos casados o no, y se hayan procreado dentro o fuera de una relación matrimonial formalizada.

Es conocida la forma expedita y segura en que se produce la inscripción del nacimiento de un bebé en nuestros hospitales maternos, en cumplimiento estricto de lo regulado no solo en el Código de Familia, sino también en la Ley No. 51 de 15 de julio de 1985, Ley del Registro del Estado Civil, una de las legislaciones promulgadas posteriores al Código, que modificaron varios de sus artículos y que contribuyeron a la mejor aplicación de sus postulados.

Una regulación sustantiva como la familiar, no puede sus- traerse a la definición ya en tema filiatorio, de los conflictos

por el reconocimiento o impugnación de la paternidad y excepcionalmente también de la maternidad, para lo cual se definen las reglas básicas que se deben tener en cuenta, incluyendo los términos y el procedimiento para encauzar las pretensiones en este terreno tan sensible y trascendental para la familia.

Por todo ello, y aunque el paradigma de núcleo familiar se percibe frecuentemente como el del hogar de madre, padre e hijos biológicos, en perfecta armonía, el Código de Familia prevé la solución a otras situaciones diferentes en la conformación de la familia, por lo cual regula también la adopción, como forma de establecerse en aquellos casos que se requiera, en interés del mejor desarrollo y educación del menor, y creando entre el adoptante y adoptado un vínculo de parentesco igual al existente entre padres e hijos, del cual se deriven los mismos derechos y deberes que en cuanto a la relación paterno-filial.

Esta institución fue modificada posterior a la vigencia del Código de Familia, mediante el Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984, que vino a reafirmar aún más los lazos que se establecen entre adoptante y adoptado, y declara la irrevocabilidad de la adopción.

En ese sentido define nuestro Código de Familia los requisitos que deben darse y probarse ante el tribunal competente por quienes promuevan su interés en adoptar a un niño o niña (que debe ser menor de 16 años de edad), tanto para el caso de que exista total conformidad y anuencia de los integrantes de la familia involucrada, como para el supuesto de oposición de determinados parientes a la adopción.

Para adoptar como requisitos básicos están el haber cumplido 25 años de edad; hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos; estar en situación de solventar las necesidades económicas del menor y tener una conducta social y personal que le permita cumplir con los deberes y obligaciones que se exigen para la patria

potestad, o sea, que demuestre poder ser buen padre o madre en el presente y el futuro.

Los cónyuges realizarán la adopción conjuntamente, pero uno de ellos podrá adoptar al hijo del otro, si el padre o madre del menor que se pretende adoptar consintiera, hubiera fallecido, hubiera sido privado de la patria potestad o fuera desconocido.

Excepto por cónyuges, nadie podrá ser adoptado por más de una persona.

Es el Código de Familia quien determina quiénes son parientes entre sí, es decir, define el parentesco, entendiéndose como tal el lazo que existe entre personas que proceden de un tronco común, bien por descender o ascender unas de otras en línea recta fundada en el hecho de la generación (abuelos, padres, hijos, nietos, biznietos), donde entonces se dice que están presentes los vínculos de sangre (de ahí la palabra consanguinidad, son parientes por consanguinidad) e igualmente lo son los de la línea colateral (hermanos, sobrinos, tíos y primos).

Son parientes por afinidad los que surgen a causa del matrimonio entre el cónyuge y los parientes del otro (suegros, yernos, nueras, cuñados).

Esto es importante precisarlo y que las personas conozcan la trascendencia y efectos de la condición que tienen respecto al grado de parentesco sea por consanguinidad o afinidad dentro de su familia, ya que según cada caso, ello crea determinadas obligaciones recíprocas (como el deber de dar alimentos), hace surgir derechos o prohibiciones, inhabilita para ciertos actos legales, entre otras consecuencias que se deben conocer.

No menos trascendente resulta la institución de la tutela, con la cual cierra su redacción el Código de Familia, la cual se constituye ante el tribunal para la guarda y cuidado, la educación, la defensa de los derechos y la protección de los intereses patrimoniales de los menores de edad que no estén bajo patria potestad; y la defensa de los derechos,

la protección de la persona e intereses patrimoniales, y el cumplimiento de las obligaciones civiles de los mayores de edad que hayan sido declarados judicialmente incapacitados.

La tutela está llamada a desempeñar un papel mucho más preponderante en el futuro mediano y a largo plazo dados los fenómenos de envejecimiento poblacional previstos para el país. Debe conocerse que la Ley prevé que el tutor no solo cuide y proteja a ese menor, a ese anciano o persona incapacitada judicialmente, sino que también lo represente legalmente y administre en beneficio del tutelado, el patrimonio que este tenga o adquiera. También para estos casos se requiere de autorización del tribunal para disponer de los bienes según sea necesario.

A continuación le mostramos al lector, esta obra jurídica que se abre a ustedes: el Código de Familia cubano, que aunque ya cuente con cuatro décadas de vigencia, y con la necesidad de su actualización, ha sido una de las leyes, bajo cuyo influjo se han formado las últimas generaciones de cubanos. El texto que hoy le presentamos se corresponde con el publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición Ordinaria, No. 6, de 15 de febrero de 1975, con las modificaciones introducidas posteriormente.

Le deseamos disfrute su lectura, la tenga como texto cabecera y de consulta o referencia para su vida familiar. Si eso lo logramos, habrá valido la pena el esfuerzo de esta edición.

MSc. Guillermo RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

LEY No. 1289
CÓDIGO DE FAMILIA

PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

OSVALDO DORTICÓS TORRADO, Presidente de la República de Cuba.

HAGO SABER: Que el Consejo de Ministros ha acordado y yo he sancionado lo siguiente:

POR CUANTO: La igualdad de los ciudadanos, resultante de la obligación de la propiedad privada sobre los medios de producción y de la extinción de las clases y de todas las formas de la explotación de unos seres humanos por otros, es un principio básico de la sociedad socialista que construye nuestro pueblo, principio que debe plasmarse plena y expresamente en los preceptos de nuestra legislación.

POR CUANTO: Aún subsisten en nuestro país con respecto a la familia, normas jurídicas del pasado burgués, obsoletas y contrarias al principio de la igualdad, discriminatorias de la mujer y de los hijos nacidos fuera del matrimonio; normas que deben ser sustituidas por otras que concuerden plenamente con el principio de la igualdad y con las realidades de nuestra sociedad socialista en continuo e impetuoso avance.

POR CUANTO: El concepto socialista sobre la familia parte de la consideración fundamental de que constituye una entidad en que están presentes e íntimamente entrelazados el interés social y el interés personal, puesto que,

en tanto célula elemental de la sociedad, contribuye a su desarrollo y cumple importantes funciones en la formación de las nuevas generaciones y, en cuanto centro de relaciones de la vida en común de mujer y hombre entre éstos y sus hijos y de todos con sus parientes, satisface hondos intereses humanos, afectivos y sociales, de la persona.

POR CUANTO: El concepto expresado en el anterior Por Cuanto y la importancia que, a partir de él, confiere nuestra sociedad socialista a la familia, aconsejan que las normas jurídicas relativas a ésta se consignent en texto separado de otras legislaciones y constituyan el Código de Familia.

POR CUANTO: La adopción y tutela son instituciones que cumplen funciones normal y generalmente correspondientes a la familia, es conveniente que las normas jurídicas relativas a las mismas constituyan parte del Código de la Familia, tanto más cuanto que la relación entre adoptantes y adoptados son semejantes a la existencia entre padres e hijos.

POR CUANTO: El proyecto del Código de Familia fue elaborado, de acuerdo con los presupuestos consignados en los Por Cuantos anteriores, por las Comisiones de Estudios Jurídicos y su Secretariado y sometido al examen individual de los Viceprimeros Ministros, Ministros, Jefes de Organismos Centrales y otros funcionarios, los cuales le hicieron las observaciones y sugerencias que estimaron pertinentes, las que fueron tomadas en cuenta para el perfeccionamiento del proyecto preparado.

POR CUANTO: El proyecto de Código de Familia fue sometido a través de los Comités de Defensa de la Revolución, la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y diversos organismos del Estado y sociales, a la más amplia discusión por todo el pueblo, que lo aprobó, en su totalidad y precepto por precepto, por una mayoría

superior al noventa y ocho por ciento de los participantes en las reuniones y asambleas convocadas al efecto.

POR CUANTO: No obstante la aprobación general, el Secretariado de las Comisiones de Estudios Jurídicos examinó detenidamente todas y cada una de más de 4 000 observaciones presentadas a 121 de los 166 artículos del proyecto e independientemente del número de los que votaron por ella, acogió e incorporó al texto del proyecto cuanta sugerencia consideró racional y útil a los fines de la legislación propuesta.

POR TANTO: En uso de las facultades que le están conferidas, el Consejo de Ministros resuelve dictar la siguiente:

LEY No. 1289 CÓDIGO DE FAMILIA

Título Preliminar DE LOS OBJETIVOS DE ESTE CÓDIGO

Artículo 1. Este Código regula jurídicamente las instituciones de familia: matrimonio, divorcio, relaciones paterno-filiales, obligación de dar alimentos, adopción y tutela, con los objetivos principales de contribuir:

- al fortalecimiento de la familia y de los vínculos de cariño, ayuda y respeto recíprocos entre sus integrantes;
- al fortalecimiento del matrimonio legalmente formalizado o judicialmente reconocido, fundado en la absoluta igualdad de derechos de hombre y mujer;
- al más eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a la protección, formación moral y educación de los hijos para que se desarrollen plenamente en todos los aspectos y como dignos ciudadanos de la sociedad socialista;
- a la plena realización del principio de la igualdad de todos los hijos.

Título I DEL MATRIMONIO

Capítulo I DEL MATRIMONIO EN GENERAL

Sección Primera Del Matrimonio y de su Constitución

Artículo 2. (Modificado). El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común.

- El matrimonio sólo producirá efectos legales cuando se formalice o se reconozca de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley del Registro del Estado Civil.

(El párrafo segundo de este artículo quedó modificado y redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Sexta de la Ley No. 51, de 15 de julio de 1985, Ley del Registro del Estado Civil).

(Ver artículo 35 Constitución de la República).

Artículo 3. (Modificado). Están autorizados para formalizar el matrimonio la hembra y el varón mayores de 18 años de edad. En consecuencia, no están autorizados para formalizar el matrimonio los menores de 18 años de edad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, excepcionalmente, y por causas justificadas, podrá otorgarse a los menores de 18 años la autorización para formalizar el matrimonio siempre que la hembra tenga, por lo menos, 14 años cumplidos y el varón 16 años, también cumplidos.

Esta autorización y excepcional pueden otorgarla:

- 1) el padre y la madre conjuntamente, o uno de ellos si el otro hubiere fallecido o estuviere privado de la patria potestad;
- 2) el o los adoptantes cuando el menor hubiese sido adoptado;

- 3) el tutor, si el menor estuviese sujeto a tutela;
- 4) los abuelos maternos o paternos, indistintamente, a falta de los anteriores, prefiriéndose a aquellos que convivan en el mismo domicilio con el menor;
- 5) uno solo de los facultados, cuando el otro que deba darla conjuntamente con él se vea impedido de hacerlo;
- 6) el tribunal, si por razones contrarias a los principios y normas de la sociedad socialista, se negaren a otorgar la autorización las personas facultadas para ello.

En caso de negar la autorización alguno de los que deben otorgarla conjuntamente con otro, los interesados en contraer matrimonio o uno de ellos o un hermano o hermana mayor de edad de cualquiera de los mismos podrá instar al tribunal popular competente para que otorgue la autorización requerida.

El tribunal, en audiencia verbal, oirá el parecer de todos los interesados y del fiscal y, teniendo en cuenta el interés social y el de los contrayentes, decidirá lo que proceda sin ulterior recurso.

(Este artículo quedó redactado de la forma que se consigna por la Ley No. 9 de 22 de agosto de 1977).

Artículo 4. No podrán contraer matrimonio:

- 1) los que carecieren de capacidad mental para otorgar su consentimiento;
- 2) los unidos en matrimonio formalizado o judicialmente reconocido;
- 3) las hembras menores de 14 años y los varones menores de 16 años.

Artículo 5. No podrán contraer matrimonio entre sí:

- 1) los parientes en línea directa, ascendente y descendente; y los hermanos de uno o doble vínculo;
- 2) el adoptante y el adoptado;
- 3) el tutor y el tutelado;

- 4) los que hubiesen sido condenados como autores, o como autor y cómplice de la muerte del cónyuge de cualquiera de ellos.

Artículo 6. Extinguido su matrimonio por cualquier causa, hombre y mujer quedan en aptitud de formalizar nuevo matrimonio en cualquier tiempo posterior a dicha extinción.

No obstante, a fin de facilitar la determinación de la paternidad, la mujer cuyo matrimonio se haya extinguido y se disponga a formalizar uno nuevo, antes de transcurrir 300 días de dicha extinción, deberá acreditar con certificado médico expedido por un centro asistencial estatal, si se halla o no en estado de gestación.

Este certificado, si es positivo, constituirá presunción de la paternidad del cónyuge del matrimonio extinguido. Contra esta presunción caben todas las pruebas admitidas en Derecho.

Si la mujer ha dado a luz antes de los 300 días mencionados, no será necesario, para formalizar nuevo matrimonio, presentar dicho certificado.

Sección Segunda De la Formalización del Matrimonio

Artículo 7. Los encargados del Registro del Estado Civil y los notarios públicos son los funcionarios facultados para autorizar la formalización de los matrimonios con arreglo a las disposiciones de este Código.

Los cónsules y vicecónsules de la República son los funcionarios facultados para autorizar, en el extranjero, los matrimonios entre cubanos.

(La Ley No. 1308 de 21 de agosto de 1976 complementó el párrafo segundo de este artículo facultando a los cónsules y vicecónsules de la República de Cuba, para que en el país en que como tales estén acreditados, formalicen de acuerdo con las leyes cubanas, los matrimonios de ciudadanos cubanos con ciudadanos extranjeros, facultando a los Ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores para

reglamentar la función consular relacionada con dicha actividad).

La Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 mediante su Disposición Final Tercera derogó expresamente dicha Ley.

Ver artículo 10, inciso 1), de la Ley No. 50 de 28 de diciembre de 1984.

Ver artículo 14 de la Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil.

Artículos 8 al 17. (Derogados)

(Los artículos derogados contenían los requisitos para la formalización del matrimonio.

La Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil- en su Disposición Final Tercera derogó expresamente dichos artículos y estableció los requisitos para la formalización del matrimonio).

Ver artículos 61 al 73 inclusive de la expresada Ley.

Ver artículos 113 al 121 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil puesto en vigor por la Resolución No. 157, del Ministro de Justicia, en 25 de diciembre de 1985.

Sección Tercera
Del Matrimonio no Formalizado

Artículo 18. La existencia de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer con aptitud legal para contraerla y que reúna los requisitos de singularidad y estabilidad, sufrirá todos los efectos propios del matrimonio formalizado legalmente cuando fuere reconocida por tribunal competente.

Quando la unión matrimonial estable no fuere singular porque uno de los dos estaba unido en matrimonio anterior, el matrimonio surtirá plenos efectos legales en favor de la persona que hubiere actuado de buena fe y de los hijos habidos de la unión.

Artículo 19. La formalización o el reconocimiento judicial del matrimonio entre el hombre y la mujer unidos en la forma señalada en el artículo que antecede, retrotraerá sus efectos a la fecha de iniciada la unión, de acuerdo con

lo manifestado por los cónyuges y testigos en el acta de formalización del matrimonio o la declarada en la sentencia judicial.

Artículo 20. (Derogado)

(Este artículo establecía que la ejecutoria recaída en proceso sobre reconocimiento de la existencia de la unión matrimonial, se inscribiría en la sección correspondiente del Registro del Estado Civil del domicilio conyugal.

La Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil- en su Disposición Final Tercera derogó expresamente este artículo y reguló lo concerniente a dicha materia.

Ver artículo 72 y el párrafo final del artículo 58 de la Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil. Ver art. 113 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil puesto en vigor por la Resolución No. 157 del Ministro de Justicia, en 25 de diciembre de 1985).

Sección Cuarta
De la Prueba del Matrimonio

Artículo 21. (Derogado)

(Este artículo establecía como único medio de prueba del matrimonio, la certificación acreditativa de su inscripción en el Registro del Estado Civil.

La Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil- en su Disposición Final Tercera derogó expresamente este artículo.

Ver artículo 72 de la Ley No. 51 de 15 de julio de 1985).

Artículo 22. (Modificado). En cualquier proceso civil, penal o administrativo en que no pudiera probarse la existencia de la unión matrimonial conforme con la Ley del Registro del Estado Civil, a los fines del proceso de que se trate, hará prueba de su existencia la posesión constante del estado conyugal unida a las actas de inscripción de nacimiento de los hijos, si los hubiera, y con los efectos, según el caso del artículo 18.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Sexta de la Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil).

Artículo 23. (Derogado)

(Este artículo regulaba la forma de probar el matrimonio formalizado en un país extranjero donde estos actos no estuvieren sujetos a un registro regular o auténtico. La Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil- en su Disposición Final Tercera derogó expresamente este artículo.

Ver artículo 73 de la Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil).

Capítulo II DE LAS RELACIONES CONYUGALES

Sección Primera

De los Derechos y Deberes entre Cónyuges

Artículo 24. El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges.

Artículo 25. Los cónyuges deben vivir juntos, guardarse la lealtad, la consideración y el respeto debidos y ayudarse mutuamente.

Los derechos y deberes que este Código establece para los cónyuges, subsistirán íntegramente mientras no se extinga legalmente el matrimonio, aunque por motivo justificado no mantuvieren un hogar común.

Artículo 26. Ambos cónyuges están obligados a cuidar la familia que han creado y a cooperar el uno con el otro en la educación, formación y guía de los hijos conforme a los principios de la moral socialista. Igualmente, en la medida de las capacidades o posibilidades de cada uno, deben participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo.

Artículo 27. Los cónyuges están obligados a contribuir a la satisfacción de las necesidades de la familia que han

creado con su matrimonio, cada uno según sus facultades y capacidad económica. No obstante, si alguno de ellos sólo contribuyere a esa subsistencia con su trabajo en el hogar y en el cuidado de los hijos, el otro cónyuge deberá contribuir por sí solo a la expresada subsistencia, sin perjuicio del deber de cooperar a dichos trabajo y cuidado.

Artículo 28. Ambos cónyuges tienen derecho a ejercer sus profesiones u oficios y están en el deber de prestarse recíprocamente cooperación y ayuda para ello, así como para emprender estudios o perfeccionar sus conocimientos, pero cuidarán en todo caso de organizar la vida en el hogar de modo que tales actividades se coordinen con el cumplimiento de las obligaciones que este Código les impone.

Sección Segunda Del Régimen Económico del Matrimonio

Artículo 29. El régimen económico del matrimonio será el de la comunidad de bienes que regula este Código.

Este régimen existirá desde el momento en que se formalice el matrimonio o desde la fecha de iniciada la unión en los casos a que se refiere el artículo 19, y cesará cuando el vínculo matrimonial se extinga por cualquier causa.

Artículo 30. A los efectos del régimen que se establece en el artículo anterior, se considerarán bienes comunes los siguientes:

- 1) los salarios o sueldos, jubilaciones, pensiones u otra clase de ingreso que ambos cónyuges o cualquiera de ellos obtenga durante el matrimonio, como producto del trabajo o procedente de la seguridad social;
- 2) los bienes y derechos adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad o para uno de los cónyuges;
- 3) los frutos, rentas o intereses percibidos o devenidos durante el matrimonio, procedentes de los

bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges.

Artículo 31. Se presumirán comunes los bienes de los cónyuges mientras no se pruebe que son propios de uno solo de ellos.

Artículo 32. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:

- 1) los adquiridos por cada uno de ellos antes de su matrimonio;
- 2) los adquiridos durante el matrimonio por cada uno de los cónyuges, por herencia, por título lucrativo o por permuta o sustitución de un bien propio. En las donaciones y legados onerosos, se deducirá el importe de las cargas cuando hayan sido soportadas por el caudal común;
- 3) los adquiridos con dinero propio de uno de los cónyuges;
- 4) las sumas que cobre uno de los cónyuges en los plazos vencidos, durante el matrimonio, que correspondan a una cantidad o crédito constituido a su favor con anterioridad al matrimonio y pagadero en cierto número de plazos;
- 5) los de uso personal exclusivo de cada uno de los cónyuges.

Sección Tercera

De las Cargas y Obligaciones de la Comunidad Matrimonial de Bienes

Artículo 33. Serán de cargo de la comunidad matrimonial de bienes:

- 1) el sostenimiento de la familia y los gastos en que se incurra en la educación y formación de los hijos comunes y de los que sean de uno solo de los cónyuges;
- 2) todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio, por cualquiera de los cónyuges,

- excepto en los casos en que para contraerlas se necesitare del consentimiento de ambos;
- 3) las rentas o intereses devengados durante el matrimonio, de las obligaciones a que estuvieren sujetos los bienes propios de cada cónyuge y los comunes;
 - 4) las reparaciones menores o de mera conservación en los bienes propios, hechas durante el matrimonio.

Artículo 34. El pago de las deudas contraídas por uno de los cónyuges antes del matrimonio no será de cargo de la comunidad matrimonial de bienes.

Sección Cuarta De la Administración de la Comunidad Matrimonial de Bienes

Artículo 35. Los cónyuges son los administradores de los bienes de la comunidad matrimonial y cualquiera de ellos podrá realizar, indistintamente, los actos de administración, y adquirir los bienes que por su naturaleza estén destinados al uso o al consumo ordinario de la familia.

Artículo 36. Ninguno de los cónyuges podrá realizar actos de dominio en relación con los bienes de la comunidad matrimonial sin el previo consentimiento del otro, excepto los de reivindicación para la comunidad.

(La Ley No. 48 de 27 de diciembre de 1984 -Ley General de la Vivienda-, en su artículo 9, párrafo segundo, estableció: “Si el usufructuario oneroso o el ocupante legítimo fuere casado, el contrato se otorgará a favor de ambos cónyuges, a menos que uno de ellos no ocupe la vivienda, caso en el cual el contrato se otorgará a favor del que la ocupe y la propiedad de ella no integrará la comunidad de bienes del matrimonio. Si el usufructuario oneroso u ocupante legítimo fuere divorciado y residiere en la vivienda con su ex cónyuge, el contrato se otorgará a favor de ambos sólo en el caso de que el usufructo hubiere sido concedido durante el matrimonio o hubieren comenzado juntos la ocupación de la vivienda”).

Artículo 37. En todo lo no previsto en este Código, la comunidad matrimonial de bienes se regirá por las disposiciones generales que regulan la comunidad de bienes.

Sección Quinta
De la Disolución y Liquidación de la Comunidad
Matrimonial de Bienes

Artículo 38. La comunidad matrimonial de bienes termina por la extinción del matrimonio. Los bienes comunes se dividirán por mitad entre los cónyuges, o, en caso de muerte, entre el sobreviviente y los herederos del fallecido.

Quando el vínculo matrimonial se extinga por causa de nulidad, el cónyuge que por su mala fe hubiese dado motivo a dicha causa no tendrá participación en los bienes de la comunidad matrimonial.

Cualquiera de los cónyuges podrá renunciar en todo o en parte a sus derechos en la comunidad matrimonial de bienes, después de extinguido el vínculo matrimonial. La renuncia deberá constar siempre por escrito.

Artículo 39. Cuando por no haber acuerdo entre los interesados para la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes en la forma dispuesta en el artículo que antecede, fuere necesario proceder a su liquidación judicial, se procederá al inventario y avalúo de los bienes sobre la base del valor que tenían en la fecha de extinción del matrimonio.

Hecho el avalúo se deducirán las deudas, cargas y obligaciones pendientes, y el remanente se distribuirá en la proporción que indica el artículo anterior.

Artículo 40. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de la extinción del matrimonio por causa de divorcio o de nulidad, sin que se hayan iniciado judicial o extrajudicialmente las operaciones de liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 38, cada cónyuge

quedará como propietario único de los bienes muebles de propiedad común cuya posesión haya mantenido a partir de dicha extinción.

(Ver artículos 372 y siguientes de la Ley No. 7 de 19 de agosto de 1977 -Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico- que regulan el procedimiento de divorcio).

Artículo 41. No obstante lo dispuesto en los artículos que anteceden, el tribunal, al proceder a la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, podrá disponer que determinados bienes domésticos de propiedad común que considere necesarios o convenientes para la educación y desarrollo de los hijos menores, se adjudiquen en propiedad preferentemente al cónyuge a cuya guarda y cuidado queden los menores, y en el caso de que ello excediere de su participación, se le otorgará el uso y disfrute de ese exceso, sin perjuicio de que el otro cónyuge conserve su derecho de propiedad sobre la expresada participación, mientras aquél no tenga a su disposición y uso otros similares.

Artículo 42. En caso de que el matrimonio se extinga por causa de muerte, el cónyuge sobreviviente y los hijos menores tendrán derecho a continuar en el uso y disfrute de los bienes comunes hasta que se aprueben judicialmente las operaciones de la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes. Además, el tribunal que conozca del proceso sucesorio, autorizará, en la medida que resulte necesario, al cónyuge sobreviviente, para percibir el pago de cantidades correspondientes al fallecido o a la comunidad matrimonial de bienes y para que, con cargo a ella o al efectivo que forme parte de los bienes dejados, satisfaga sus gastos corrientes y los de los hijos menores y al efecto, extraiga, de las cuentas bancarias del fallecido o de ambos, las sumas que sean menester.

Capítulo III DE LA EXTINCIÓN DEL MATRIMONIO

Sección Primera Disposiciones Generales

Artículo 43. (Modificado). El vínculo matrimonial se extingue:

- 1) por fallecimiento de cualquiera de los cónyuges;
- 2) por la declaración judicial de presunción de muerte de uno de los cónyuges;
- 3) por la nulidad del matrimonio declarada por sentencia firme;
- 4) por sentencia firme de divorcio o escritura de divorcio otorgada ante Notario.

(El inciso 5) de este artículo quedó redactado en la forma en que se consigna por la Disposición Final Segunda del Decreto-Ley No. 154 sobre el divorcio notarial de 6 de septiembre de 1994).

Sección Segunda De la Presunción de Muerte del Cónyuge

Artículo 44. (Modificado). La declaración judicial de presunción de muerte de uno de los cónyuges extingue el matrimonio desde el momento en que dicha declaración quede firme.

(El párrafo segundo de este artículo contempla la posibilidad de que apareciera el cónyuge declarado presuntamente fallecido, en el caso de que el otro cónyuge hubiera contraído nuevo matrimonio y en el párrafo tercero establecía que la presunción de muerte del cónyuge ausente se declaraba pasados dieciocho meses de la declaración de ausencia).

La Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil- suprimió en su Disposición Final Tercera el párrafo segundo.

Ver artículos 589 y siguientes de la Ley No. 7 de 19 de agosto de 1977 -Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

Ver artículos 33 al 37 del Código Civil, reguladores de la ausencia y la presunción de muerte).

Sección Tercera De la Nulidad del Matrimonio

Artículo 45. Son nulos los matrimonios formalizados:

- 1) con infracción de cualquiera de las prohibiciones señaladas en los artículos 4 y 5;
- 2) con error en las personas o mediante coacción o intimidación que vicien el consentimiento;
- 3) con infracción de los requisitos que para su validez exige este Código.

Artículo 46. La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde:

- 1) a cualquiera de los cónyuges y al fiscal en los casos de los incisos 1) y 3) del artículo anterior;
- 2) al cónyuge que haya sufrido el error, la coacción o la intimidación en el caso del inciso 2) del artículo anterior.

Artículo 47. La acción de nulidad deberá ejercitarse dentro del plazo de seis meses a partir de la formalización del matrimonio, en los casos previstos en el artículo 3 e incisos 2) y 3) del artículo 45.

Transcurrido el plazo de seis meses sin haberse ejercitado la acción en los casos en que proceda, el matrimonio quedará convalidado de pleno derecho.

En el caso del inciso 3) del artículo 4, el matrimonio quedará convalidado si los menores arribaren a la edad establecida en dicho precepto sin haberse solicitado la nulidad del matrimonio o la hembra hubiese quedado en estado de gestación.

El matrimonio formalizado con alguno de los vicios previstos en los incisos 1) y 2) del artículo 4, y en el artículo 5,

no es convalidable, y la acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

Artículo 48. El matrimonio declarado nulo producirá en todo caso, los derechos previstos en este Código sólo para los hijos habidos en el mismo y para el cónyuge que ha obrado de buena fe.

Si ambos cónyuges hubiesen obrado de mala fe, el matrimonio no producirá tales derechos en favor de ninguno de ellos.

Se presume que ha actuado de mala fe el cónyuge que en el momento de la formalización del matrimonio tenía conocimiento de la existencia de una causa de nulidad.

La buena fe se presume, salvo prueba en contrario.

Sección Cuarta Del Divorcio

Artículo 49. El divorcio producirá la disolución del vínculo matrimonial y los demás efectos que en esta Sección se establecen.

Artículo 50. (Modificado). El divorcio puede obtenerse por sentencia judicial o escritura notarial.

(Este artículo quedó redactado en la forma en que se consigna por la Disposición Final Segunda del Decreto-Ley No. 154 sobre el divorcio notarial de 6 de septiembre de 1994).

Artículo 51. Procederá el divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, o cuando el tribunal compruebe que existen causas de las que resulte que el matrimonio ha perdido su sentido para los esposos y para los hijos, y con ello también para la sociedad.

Artículo 52. Se entiende, a los efectos de esta ley, que el matrimonio pierde su sentido para los cónyuges y para los hijos, y con ello también para la sociedad, cuando existan causas que hayan creado una situación objetiva en la que el matrimonio haya dejado de ser o ya no pueda ser en el futuro la unión de un hombre y una mujer en que de

modo adecuado se puedan ejercer los derechos, cumplir las obligaciones y lograrse los fines a que se refieren los artículos 24 al 28, ambos inclusive.

Artículo 53. La acción de divorcio podrá ejercitarse indistintamente por cualquiera de los cónyuges.

Artículo 54. La acción de divorcio podrá ejercitarse en todo tiempo mientras subsista la situación que la motive.

Artículo 55. El divorcio producirá, entre los cónyuges, los efectos siguientes:

- 1) la extinción del matrimonio existente entre ellos, a partir del día en que la sentencia adquiera firmeza;
- 2) la separación de los bienes de los cónyuges, previa liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, que se llevará a efecto conforme a las reglas establecidas en la Sección Quinta del Capítulo II del Título I, de este Código;
- 3) la extinción del derecho de sucesión entre los cónyuges.

Artículo 56. Si los cónyuges hubieren convivido por más de un año o procreado durante el matrimonio, el tribunal, al fallar el divorcio, concederá pensión a favor de uno de ellos en los casos siguientes:

- 1) al cónyuge que no tenga trabajo remunerado y carezca de otros medios de subsistencia. Esta pensión tendrá carácter provisional y será pagada por el otro cónyuge por el término de seis meses si no existieren hijos menores a su guarda y cuidado, o de un año, si los hubiere, a los efectos de que el beneficiario pueda obtener trabajo remunerado;
- 2) al cónyuge que por causa de incapacidad, edad, enfermedad u otro impedimento insuperable esté imposibilitado de trabajar y, además, carezca de otros medios de subsistencia. En este caso la pensión se mantendrá mientras persista el impedimento.

Artículo 57. El tribunal, en la sentencia de divorcio, hará pronunciamiento sobre la patria potestad, estableciéndose como regla que ambos padres la conservarán sobre sus hijos menores.

No obstante, el tribunal podrá deferir la patria potestad a favor de aquel que a su juicio deba ejercerla, cuando así lo exija el interés de los hijos menores, consignando las razones por las cuales priva de ella al otro.

Igualmente, el tribunal podrá determinar, fundándola, la privación de la patria potestad a ambos padres, cuando esto sea necesario en interés de los hijos menores, en cuyo supuesto constituirá a los hijos en tutela.

Artículo 58. En la sentencia de divorcio el tribunal deberá determinar cuál de los padres conservará la guarda y cuidado de los hijos menores habidos en el matrimonio y dispondrá lo conveniente para que dichos menores mantengan la adecuada comunicación con el padre a quien no se defiera dicha guarda y cuidado.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el tribunal se atenderá a las reglas establecidas en los artículos 88, 89 y 90.

Artículo 59. El sostenimiento de los hijos menores es obligación de ambos padres, aun cuando no tengan la patria potestad sobre ellos, o éstos no estén bajo su guarda y cuidado, o estén ingresados en un establecimiento de educación. De acuerdo con la expresada norma, el tribunal fijará en la sentencia de divorcio la cuantía de la pensión que en cada caso aquel de los padres que no los tenga bajo su guarda y cuidado deba abonar para sus hijos menores.

Artículo 60. La ascendencia de las pensiones para los hijos menores se fijará en relación a los gastos normales de los mismos, así como a los ingresos de los padres, a fin de establecer la responsabilidad de éstos en forma proporcional.

Artículo 61. Las medidas dispuestas en las sentencias de divorcio sobre pensiones, patria potestad, guarda y cuidado y comunicación, podrán modificarse en cualquier tiempo cuando resulte procedente por haber variado las circunstancias de hecho que determinaron su adopción.

Artículo 62. En las medidas provisionales que deban adoptarse durante la sustanciación del proceso de divorcio respecto a la guarda y cuidado y comunicación de los hijos, pensión alimenticia para éstos y la del cónyuge, si fuera procedente, se observarán las reglas establecidas en esta Sección.

Dichas medidas podrán variarse, asimismo, durante el proceso si surgieren razones que lo ameriten.

Artículo 63. (Derogado)

(Este artículo reconocía como prueba del divorcio, la certificación de la sentencia firme dictada por tribunal competente o su anotación en el Registro del Estado Civil, pudiendo justificarse con uno u otro documento.

La Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil- en su Disposición Final Tercera derogó expresamente este artículo.

Ver artículos 3, 64 y Disposiciones Especiales Tercera y Cuarta de la Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil).

Artículo 64. La sentencia de divorcio dictada en el extranjero que disuelva un matrimonio celebrado de acuerdo con las leyes cubanas o de un país extranjero, entre cubanos, o entre cubanos y extranjeros o entre extranjeros, tendrá validez en Cuba, siempre que por la representación consular cubana en el país donde se haya concedido el divorcio, se certifique que éste fue sustanciado y fallado de acuerdo con las leyes de dicho país.

Título II DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES

Capítulo I DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS

Sección Primera Del Reconocimiento y su Inscripción

Artículo 65. Todos los hijos son iguales y por ello disfrutan de iguales derechos y tienen los mismos deberes con respecto a sus padres, cualquiera que sea el estado civil de éstos.

(Ver art. 66 de la Constitución de la República).

Artículos 66 al 73. (Derogados).

(Estos artículos recogían el procedimiento para la inscripción del nacimiento del hijo habido dentro o fuera del matrimonio, regulando la inscripción del nacimiento del hijo cuando la declaración la hiciera la madre y ésta consignare el nombre del padre y su posterior reconocimiento o impugnación, señalando los medios de prueba de la filiación y el reconocimiento del hijo mayor de edad.

La Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil- en su Disposición Final Tercera derogó expresamente los artículos 66 al 73 inclusive).

(Ver artículos 55 al 57 de la Ley No. 51 de 15 de julio de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil. Ver artículos del 73 al 93 del Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil puesto en vigor por la Resolución No. 157 del Ministro de Justicia dictada en 25 de diciembre de 1985).

Sección Segunda De la Presunción de la Filiación

Artículo 74. Se presumirá que son hijos de las personas unidas en matrimonio:

- 1) los nacidos durante la vida matrimonial;
- 2) los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la fecha de la extinción del vínculo matrimonial, si la madre no hubiere contraído nuevas nupcias.

Las presunciones establecidas en este artículo se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.

Artículo 75. Se presumirá la paternidad:

- 1) cuando pueda inferirse de la declaración del padre formulada en un documento indubitado;
- 2) cuando hubieren sido notorias las relaciones maritales con la madre durante el período en que pudo tener lugar la concepción;
- 3) cuando la condición de hijo se haya hecho ostensible por actos del propio padre o de su familia.

Artículo 76. Se presumirá la maternidad cuando la madre se halle en los casos de los incisos 1) y 3) del artículo anterior. En los demás casos, la maternidad quedará probada por el hecho del parto y de la identidad del hijo.

Artículo 77. La acción para reclamar el reconocimiento de los hijos corresponde a éstos y al padre o madre que ya los haya reconocido, con respecto al que aún no lo haya hecho.

Sección Tercera De la Impugnación del Reconocimiento

Artículo 78. (Modificado). La inscripción del nacimiento del hijo, hecha conforme con lo establecido en el artículo 45 de la Ley del Registro del Estado Civil, podrá ser impugnada por el cónyuge que no hubiera concurrido al acto. La impugnación sólo podrá fundarse en la imposibilidad de los cónyuges para haber procreado el hijo.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Sexta de la Ley No. 51 de 15 de diciembre de 1985 -Ley del Registro del Estado Civil).

Artículo 79. La acción para la impugnación a que se refiere el artículo anterior sólo podrá ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que el demandante hubiere tenido conocimiento de la inscripción.

Artículo 80. El hijo reconocido durante su minoría de edad, sólo podrá impugnar el reconocimiento dentro del año siguiente a la fecha en que arribe a su mayoría de edad.

Artículo 81. La persona que se considere con derecho a inscribir como suyo, al hijo reconocido previamente por otra persona, en virtud de considerarse su verdadero progenitor, podrá en cualquier tiempo establecer la acción conducente a ese fin.

Si fuere menor de edad la persona de cuyo reconocimiento se trate, se le dará traslado al fiscal a fin de que dictamine si conviene a los intereses del menor la sustanciación o no del proceso, antes de que arriba a la mayoría de edad.

Visto el dictamen del fiscal, el tribunal decidirá con carácter previo si procede o no llevar adelante el proceso. En caso negativo acordará el archivo de las actuaciones y reservará a las partes el derecho para que lo ejerzan a tenor de lo que se dispone en el párrafo siguiente:

Si fuere mayor de edad la persona de cuyo reconocimiento se trate, será requisito para la sustanciación del proceso que la acción sea ejercitada conjuntamente por quien se considere con derecho a reconocer y por el hijo cuyo reconocimiento se pretenda.

Capítulo II

DE LAS RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS

Sección Primera

De la Patria Potestad y su Ejercicio

Artículo 82. Los hijos menores de edad estarán bajo la patria potestad de sus padres.

Artículo 83. El ejercicio de la patria potestad corresponde a ambos padres, conjuntamente.

Corresponderá a uno solo de los padres, por fallecimiento del otro o porque se le haya suspendido o privado de su ejercicio.

Artículo 84. Los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres y, mientras estén bajo su patria potestad, a obedecerlos.

Artículo 85. La patria potestad comprende los siguientes derechos y deberes de los padres:

- 1) tener a sus hijos bajo su guarda y cuidado; esforzarse para que tengan una habitación estable y una alimentación adecuada; cuidar de su salud y aseo personal; proporcionarles los medios recreativos propios para su edad que estén dentro de sus posibilidades; darles la debida protección; velar por su buena conducta y cooperar con las autoridades correspondientes para superar cualquier situación o medio ambiental que influya o pueda influir desfavorablemente en su formación y desarrollo;
- 2) atender la educación de sus hijos; inculcarles el amor al estudio; cuidar de su asistencia al centro educacional donde estuvieren matriculados; velar por su adecuada superación técnica, científica y cultural con arreglo a sus aptitudes y vocación y a los requerimientos del desarrollo del país; y colaborar con las autoridades educacionales en los planes y actividades escolares;
- 3) dirigir la formación de sus hijos para la vida social; inculcarles el amor a la patria, el respeto a sus símbolos y la debida estimación a sus valores, el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista y el respeto a los bienes patrimoniales de la sociedad y a los bienes y derechos personales de los demás; inspirarles con su actitud y con su trato el respeto que les deben y enseñarles a respetar a las autoridades, a sus maestros y a las demás personas;
- 4) administrar y cuidar los bienes de sus hijos con la mayor diligencia; velar porque sus hijos usen y disfruten adecuadamente los bienes que les pertenezcan; y no enajenar, permutar ni ceder dichos bienes, sino

en interés de los propios menores y cumpliendo los requisitos que en este Código se establecen;

- 5) representar a sus hijos en todos los actos y negocios jurídicos en que tengan interés; completar su personalidad en aquellos para los que se requiera la plena capacidad de obrar; ejercitar oportuna y debidamente las acciones que en derecho correspondan a fin de defender sus intereses y bienes.

Artículo 86. Los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad.

Artículo 87. Los padres podrán, en interés de los hijos bajo su patria potestad, disponer de los bienes de los mismos, cederlos, permutarlos o enajenarlos por causa justificada de utilidad o necesidad, previa la autorización del tribunal competente, con audiencia del fiscal.

Sección Segunda

De la Guarda y Cuidado y de la Comunicación entre Padres e Hijos

Artículo 88. Respecto a la guarda y cuidado de los hijos, se estará al acuerdo de los padres, cuando éstos no vivieren juntos.

Artículo 89. De no mediar acuerdo de los padres o de no ser el mismo atentatorio a los intereses materiales o morales de los hijos, la cuestión se decidirá por el tribunal competente, que se guiará para resolverla, únicamente por lo que resulte más beneficioso para los menores. En igualdad de condiciones, se atenderá, como regla general, a que los hijos queden al cuidado del padre en cuya compañía se hayan encontrado hasta el momento de producirse el desacuerdo; prefiriendo a la madre si se hallaban en compañía de ambos y salvo, en todo caso, que razones especiales aconsejen cualquier otra solución.

Artículo 90. En el caso del artículo anterior, el tribunal dispondrá lo conveniente para que aquel de los padres al

que no se confiera la guarda y cuidado de los hijos menores, conserve la comunicación escrita y de palabra con ellos, regulándola con la periodicidad que el caso requiera y siempre en beneficio de los intereses de los menores. El incumplimiento de lo que se disponga a ese respecto podrá ser causa para que se modifique lo resuelto en cuanto a la guarda y cuidado, sin perjuicio de la responsabilidad de orden penal que se origine por tal conducta.

Excepcionalmente, cuando las circunstancias lo requieran, podrán adoptarse disposiciones especiales que limiten la comunicación de uno o de ambos padres con el hijo e incluso que la prohíban por cierto tiempo o indefinidamente.

Artículo 91. Las medidas adoptadas por el tribunal sobre guarda y cuidado y régimen de comunicación, podrán ser modificadas en cualquier tiempo, cuando resulte procedente por haber variado las circunstancias de hecho que determinaron su adopción.

Sección Tercera

De la Extinción y Suspensión de la Patria Potestad

Artículo 92. La patria potestad se extingue:

- 1) por la muerte de los padres o del hijo;
- 2) por arribar el hijo a la mayoría de edad;
- 3) por el matrimonio del hijo que no ha alcanzado la mayoría de edad;
- 4) por la adopción del hijo.

Artículo 93. (Modificado). Ambos padres, o uno de ellos, perderán la patria potestad sobre sus hijos:

- 1) cuando se les imponga como sanción por sentencia firme dictada en proceso penal;
- 2) cuando se atribuya a uno de ellos por escritura notarial o por sentencia firme dictada en proceso de divorcio o de nulidad de matrimonio o se prive a ambos por resolución judicial.

(El inciso 2) de este artículo quedó redactado en la forma en que se consigna por la Disposición Final Segunda del

Decreto-Ley No. 154 sobre el divorcio notarial, de 6 de septiembre de 1994).

Artículo 94. La patria potestad se suspende por incapacidad o ausencia de los padres, declarada judicialmente.

Artículo 95. Los tribunales, atendiendo a las circunstancias del caso, podrán privar a ambos padres, o a uno de ellos, de la patria potestad, o suspenderlos en el ejercicio de ésta, en los casos de los artículos 93 y 94, o mediante sentencia dictada en proceso promovido a instancia del otro o del fiscal, cuando uno o ambos padres:

- 1) incumplan gravemente los deberes previstos en el artículo 85;
- 2) induzcan al hijo a ejecutar algún acto delictivo;
- 3) abandonen el territorio nacional y, por tanto, a sus hijos;
- 4) observen una conducta viciosa, corrupta, delictiva o peligrosa, que resulte incompatible con el debido ejercicio de la patria potestad;
- 5) cometan delito contra la persona del hijo.

Artículo 96. La privación o suspensión de la patria potestad no exime a los padres de la obligación de dar alimentos a sus hijos.

Artículo 97. En las sentencias dictadas por los tribunales de lo civil, por las cuales se priven a ambos padres, o a uno de ellos, de la patria potestad, o se le suspenda su ejercicio, se proveerá, según proceda, sobre la representación legal de los menores, su guarda y cuidado, la pensión alimenticia y régimen de comunicación entre padres e hijos.

El padre afectado o el fiscal podrán instar, mediante incidente en las propias actuaciones, el cese de la suspensión de la patria potestad, así como la modificación de cualquiera otra de las medidas a que se refiere el párrafo anterior, cuando hayan variado las circunstancias que justificaron su adopción.

Artículo 98. Cuando a ambos padres o a uno de ellos se les hubiere privado de la patria potestad, o se les hubiere suspendido en su ejercicio, por sentencia dictada por los tribunales de lo penal, el otro padre, en su caso, o el fiscal, promoverá el procedimiento correspondiente en los tribunales de lo civil para resolver los extremos a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior.

Capítulo III DE LA ADOPCIÓN

Artículo 99. (Modificado). La adopción se establecerá en interés del mejor desarrollo y educación del menor, y creará entre el adoptante y adoptado un vínculo de parentesco igual al existente entre padres e hijos, del cual se deriven los mismos derechos y deberes que en cuanto a la relación paterno-filial establece este Código, extinguiéndose los vínculos jurídicos paterno-filiales y de parentesco que hayan existido entre el adoptado y sus padres y los parientes consanguíneos de estos últimos.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984, que regula la Adopción, los Hogares de Menores y las Familias Sustitutas).

Artículo 100. Para adoptar deberán reunirse los requisitos siguientes:

- 1) haber cumplido 25 años de edad;
- 2) hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos;
- 3) estar en situación de solventar las necesidades económicas del adoptado;
- 4) tener las condiciones morales y haber observado una conducta que permitan presumir, razonablemente, que cumplirá respecto al adoptado los deberes que establece el artículo 85.

Artículo 101. (Modificado). Los cónyuges realizarán la adopción conjuntamente. No obstante, uno de los

cónyuges podrá adoptar al hijo del otro, si el padre o madre del menor que se pretende adoptar consintiera, hubiera fallecido, hubiera sido privado de la patria potestad o fuera desconocido.

Excepto por cónyuges, nadie podrá ser adoptado por más de una persona.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984, que regula la Adopción, los Hogares de Menores y las Familias Sustitutas).

Artículo 102. Los adoptantes han de tener por lo menos 15 años más de edad que los adoptados.

Artículo 103. (Modificado). Solamente podrán ser adoptados los menores de 16 años de edad que se encuentren en algunos de los casos siguientes:

- 1) que sus padres no sean conocidos;
- 2) que hayan sido abandonados intencionalmente por sus padres;
- 3) que por cualquier causa se encuentren en estado de abandono y no reciban el debido cuidado de sus familiares u otras personas que puedan brindárselo, siempre que esta omisión sea culpable;
- 4) que respecto a ellos se haya extinguido la patria potestad por la muerte de los padres o ambos hayan sido privados de aquéllas;
- 5) que estén sujetos a patria potestad, si los que la hayan ejercido dieran su consentimiento; o
- 6) que no estén sujetos a patria potestad, hayan sido abandonados o se encuentren en estado de abandono y que por esta razón hayan sido acogidos en hogares de menores o círculos infantiles mixtos, si los directores de estas instituciones otorgaran su consentimiento.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 104. (Modificado). En todo caso, la adopción será autorizada judicialmente para que tenga validez y efectos legales, siempre que se justifiquen los extremos siguientes:

- 1) que los adoptantes reúnan los requisitos previstos en los artículos 100, 101 y 102;
- 2) que el adoptado sea menor de 16 años y esté comprendido en alguno de los casos del artículo 103; y
- 3) que existan fundamentos para presumir, razonablemente, que se satisfacen todas las exigencias a que se contrae el artículo 99.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 105. (Modificado). La autorización judicial para adoptar se obtendrá a través del expediente de jurisdicción voluntaria, que deberá ser promovido por los adoptantes, quienes justificarán los extremos a que se refiere el artículo anterior.

Cuando se trate de menores acogidos en hogares de menores o en círculos infantiles mixtos, las direcciones de estos centros instruirán el expediente de adopción, donde se practicarán todas las diligencias y se acreditarán los requisitos exigibles, y una vez finalizado se le entregará al promovente para su presentación al tribunal correspondiente.

Finalizado el expediente, o recibido, en un término no superior a cinco días hábiles posteriores, el tribunal correspondiente dará traslado al fiscal, el que dentro del término de los 10 días hábiles siguientes, lo devolverá al tribunal con su dictamen.

El tribunal podrá oír a las personas naturales; a las instituciones oficiales y a las organizaciones sociales y de masas que estime pertinente, y dictará, dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de haber recibido del fiscal el expediente con su dictamen, la resolución judicial que autorice o no la adopción, expresando las condiciones bajo las cuales haya tenido lugar.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 106. (Modificado). La resolución judicial que autorice la adopción será siempre fundada y expresará las condiciones bajo las cuales haya tenido lugar. En la resolución el tribunal determinará, de acuerdo con lo solicitado en el expediente, si el adoptado conserva los apellidos de su familia natural o toma los del o de los adoptantes.

Dicha resolución se deberá anotar en el Registro del Estado Civil donde conste la inscripción del nacimiento del adoptado, a todos los efectos legales. Si el adoptado estuviera comprendido en el caso del inciso 1) del artículo 103, la resolución que autorice la adopción dará lugar a la inscripción del adoptado en el Registro del Estado Civil con los apellidos del o de los adoptantes.

No se consignará declaración alguna que denote la condición de adoptado en las certificaciones que se expidan sobre esas inscripciones, excepto en el caso de solicitud expresa de la autoridad competente.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 107. Cuando el menor de cuya adopción se trate tenga siete o más años de edad, el tribunal podrá explorar su voluntad al respecto y resolver lo que proceda.

Artículo 108. (Modificado). Podrán oponerse a la adopción:

- 1) en los casos de los incisos 1), 2) y 3) del artículo 103, los padres del menor que conserven la patria potestad sobre éste, debiendo en el primer caso justificarse la paternidad mediante la certificación de la respectiva inscripción de nacimiento;
- 2) en el caso del inciso 4) del artículo 103, los abuelos, y a falta de éstos, los tíos y los hermanos mayores de edad cuando tengan a su abrigo al menor y siempre que justifiquen esta circunstancia, así como el

- parentesco mediante las correspondientes certificaciones del Registro del Estado Civil. También podrá oponerse quien ejerza la función de tutor del menor, debiendo acreditarse el ejercicio del cargo con certificación expedida por el registro de la tutela; y
- 3) en el caso del inciso 6) del artículo 103, el director del hogar de menores o del círculo infantil mixto, donde estuviera acogido el menor objeto del expediente.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 109. Si se produce oposición a la adopción por algunas de las personas a que se refiere el artículo anterior, se archivará el expediente y quedará expedito el derecho de los interesados para promoverla mediante el proceso civil ordinario.

Artículo 110. Sólo podrá impugnarse la adopción acordada judicialmente por las personas relacionadas en el artículo 108, dentro de un plazo de seis meses y siempre que justifiquen la causa que les impidió oponerse en el expediente.

Artículo 111. (Modificado). A los adoptantes se les podrá suspender o privar del ejercicio de la patria potestad, y en ese caso los adoptados no recuperarán los vínculos extinguidos con su familia consanguínea.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 112. (Modificado). La extinción, suspensión y privación de la patria potestad que ejerzan los adoptantes con respecto a los adoptados se regirán por las disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo II de este Código, sin perjuicio de lo establecido en las leyes penales.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 113. (Modificado). Las relaciones de parentesco y la obligación de dar alimentos surgidas por la adopción se registrarán por lo dispuesto en el Título III del presente Código.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 114. (Modificado). Los adoptados que con respecto a su familia adoptiva estuvieran comprendidos en cualquiera de los casos previstos en los incisos 2), 3), 4), 5) y 6) del artículo 103, podrán ser adoptados nuevamente por quienes reúnan los requisitos exigidos en el presente Código, con todos los efectos que establece.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 115. En el caso de divorcio o discrepancia entre cónyuges adoptantes, se aplicarán, respecto a sus relaciones con los adoptados, las mismas normas previstas para estos casos en el presente Código en cuanto a los hijos sujetos a patria potestad.

Artículo 116. Los derechos derivados del vínculo de parentesco que se establece entre adoptantes y adoptados, incluyen el de la herencia. Este derecho se extinguirá entre el adoptado y su familia consanguínea.

Título III DEL PARENTESCO Y DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS

Capítulo I DEL PARENTESCO

Artículo 117. Son parientes entre sí, por consanguinidad:

- 1) las personas que descienden unas de otras;
- 2) las que no siendo descendientes unas de otras, descienden de una misma persona.

Las personas a que se refiere el inciso 1) forman la línea directa de parentesco, que podrá ser ascendente o descendente.

Las referidas en el inciso 2) forman la línea colateral.

Artículo 118. El parentesco se contará por grados. En las líneas ascendente y descendente el grado se determina por el número y generaciones entre una y otra persona. En la colateral el grado se determina por el número de generaciones que las separen entre sí pasando por el ascendiente común.

Artículo 119. Son de doble vínculo los parientes por parte de padre y madre conjuntamente. Los parientes por parte de padre o por parte de madre, exclusivamente, son de un solo vínculo.

Artículo 120. Los parientes de un cónyuge lo son del otro, por afinidad, en la misma línea y grado.

Capítulo II DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS

Artículo 121. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para satisfacer las necesidades de sustento, habitación y vestido, y en el caso de los menores de edad, también los requerimientos para su educación, recreación y desarrollo.

(Ver artículo 368 y siguientes de la Ley No. 7 de 19 de agosto de 1977 -Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico).

Artículo 122. Podrán reclamar alimentos:

- 1) los hijos menores, a sus padres, en todo caso;
- 2) las demás personas con derecho a recibirlos, cuando, careciendo de recursos económicos, estén impedidos de obtener los alimentos por sí mismos por razón de edad o de incapacidad.

Artículo 123. (Modificado). Están obligados, recíprocamente, a darse alimentos:

- 1) los cónyuges;
- 2) los ascendientes y descendientes; y
- 3) los hermanos.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76, de 20 de enero de 1984).

Artículo 124. (Modificado). La reclamación de alimentos, cuando sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el orden siguiente:

- 1) al cónyuge;
- 2) a los ascendientes del grado más próximo;
- 3) a los descendientes del grado más próximo; o
- 4) a los hermanos.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 125. Cuando la obligación de dar alimentos recaiga sobre dos o más personas, el pago de la pensión será proporcional a los ingresos económicos respectivos. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el tribunal podrá obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente, sin perjuicio del derecho de ésta a reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda.

Artículo 126. (Modificado). Cuando dos o más alimentistas reclamen a la vez alimentos de una misma persona obligada legalmente a darles y ésta no tuviera ingresos económicos suficientes para atenderlos a todos, se guardará el orden establecido en el artículo 124.

Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo menor de edad o mayor de edad incapacitado, éstos serán preferidos a aquél.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Artículo 127. La cuantía de los alimentos será proporcional a la capacidad económica de quien los dé y a las necesidades de quien los reciba. El tribunal deberá tener en cuenta, para la adecuación de la cuantía, todo lo que el alimentista perciba susceptible de imputarse al concepto de alimentos.

En ningún caso se afectarán los recursos del obligado a prestar alimentos hasta el punto de que no pueda satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y, en su caso, las de su cónyuge e hijos menores.

Artículo 128. La cuantía de los alimentos se reducirá o aumentará, proporcionalmente, según la disminución o aumento que sufran las necesidades del alimentista y los ingresos económicos del que hubiere de satisfacerlos.

Artículo 129. El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos pagando la pensión que se fije o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Esta última forma de prestar alimentos sólo procederá si no se afectan disposiciones relativas a la guarda y cuidado del alimentista y no existen impedimentos de orden moral o material.

Artículo 130. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos, pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.

Artículo 131. El pago de la pensión se realizará por mensualidades anticipadas. Cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente.

Artículo 132. El derecho a los alimentos es imprescriptible, irrenunciable e intransmisible a tercero. Tampoco puede compensarse con lo que el alimentista deba al obligado a prestarlos.

Artículo 133. La acción del alimentista para reclamar mensualidades no percibidas de pensiones alimenticias prescribe por el transcurso de tres meses.

Artículo 134. Cuando fijada por el tribunal una pensión alimenticia, la abonase un tercero no obligado, con o sin conocimiento del alimentante tendrá derecho a exigir su reembolso del obligado a prestarla. Este crédito gozará de preferencia y al mismo no podrá oponerse la condición de inembargable de ningún bien, sueldo, prestación de seguridad social o ingreso económico de cualquier clase.

Artículo 135. La obligación de dar alimentos cesará:

- 1) por muerte del alimentante;
- 2) por muerte del alimentista;
- 3) cuando los recursos económicos del obligado a prestar alimentos se hubieren reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades, y, en su caso, las de su cónyuge e hijos menores y de los mayores de edad incapacitados a su abrigo;
- 4) cuando el alimentista arribare a la edad laboral y no estuviese incapacitado ni incorporado a institución nacional de enseñanza que le impida dedicarse regularmente al trabajo remunerado;
- 5) cuando cese la causa que hizo exigible la obligación de suministrar los alimentos.

Artículo 136. Las disposiciones que preceden son aplicables con carácter supletorio a los demás casos en que por este Código o leyes especiales se tenga derecho a alimentos.

(Ver artículos 368 y siguientes de la Ley No. 7 de 19 de agosto de 1977 -Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico).

Título IV DE LA TUTELA

Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 137. La tutela se constituirá judicialmente y tiene por objeto:

- 1) la guarda y cuidado, la educación, la defensa de los derechos y la protección de los intereses patrimoniales de los menores de edad que no estén bajo patria potestad;
- 2) la defensa de los derechos, la protección de la persona e intereses patrimoniales y el cumplimiento de las obligaciones civiles de los mayores de edad que hayan sido declarados judicialmente incapacitados.

Artículo 138. Estarán sujetos a tutela:

- 1) los menores de edad que no estén bajo patria potestad;
- 2) los mayores de edad que hayan sido declarados judicialmente incapacitados para regir su persona y bienes, por razón de enajenación mental, sordomudez o por otra causa.

Artículo 139. La aceptación del cargo de tutor es voluntaria; pero una vez aceptado no es renunciable sino a virtud de causa legítima debidamente justificada a juicio del tribunal.

Artículo 140. Cuando surja la necesidad de poner a una persona bajo tutela, estarán en el deber de informarlo al fiscal las personas siguientes:

- 1) los parientes del menor o incapacitado, dentro del tercer grado de consanguinidad;
- 2) las personas que convivan con el menor o incapacitado y los vecinos próximos del mismo, o el Comité de Defensa de la Revolución más inmediato.

- 3) los funcionarios públicos que por razón del ejercicio de su cargo tengan conocimiento de la existencia del estado de necesidad a que se refiere el párrafo inicial de este artículo.

Artículo 141. El fiscal, siempre que lo estime necesario, instará la constitución de la tutela cuando reciba la información a que se refiere el artículo anterior o cuando por sentencia firme se prive de la patria potestad a quien la ejercite, o se revoque la adopción.

Artículo 142. (Modificado). El tribunal competente del lugar en que reside la persona que debe estar sujeta a tutela es el facultado para:

- 1) proveer el cuidado de su persona y bienes hasta que se constituya la tutela;
- 2) constituir la tutela mediante resolución fundada en la que nombrará al tutor.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Ley No. 9 de 22 de agosto de 1977).

Artículo 143. (Modificado). El tribunal competente del domicilio del tutelado es el facultado para:

- 1) remover al tutor;
- 2) fiscalizar el ejercicio de la tutela;
- 3) declarar extinguida la tutela, exigiendo la rendición final de cuenta del tutor.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Ley No. 9 de 22 de agosto de 1977).

Artículo 144. (Modificado). Los expedientes de tutela se sustanciarán por los trámites de la jurisdicción voluntaria.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Ley No. 9 de 22 de agosto de 1977).

Ver artículos 578 y siguientes de la Ley No. 7 de 19 de agosto de 1977 -Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico).

Capítulo II

DE LA TUTELA DE LOS MENORES DE EDAD

Artículo 145. Para constituir la tutela de un menor, el tribunal citará a los parientes de éste hasta el tercer grado, que residan dentro de su demarcación o en la de otro de la misma ciudad o población en que tenga su sede, a fin de celebrar una comparecencia en la que oirá a los parientes que asistan y al menor si tuviere más de siete años de edad, para proceder a la designación del tutor, de conformidad con las reglas siguientes:

- 1) la preferencia manifestada por el menor y la opinión mayoritaria de los mencionados parientes en cuanto resulte aceptable, a juicio del tribunal;
- 2) de no poder designar el tutor a tenor de la regla anterior, el tribunal decidirá guiándose por lo que resulte más beneficioso para el menor y, en igualdad de condiciones, designará tutor al pariente en cuya compañía se hallare. De no encontrarse en compañía de ningún pariente, o de hallarse en la de varios de ellos a la vez, preferirá, en primer lugar, a uno de los abuelos; en segundo lugar, a uno de los hermanos; y en tercer lugar, a un tío;
- 3) excepcionalmente, cuando razones especiales así lo aconsejen, el tribunal podrá adoptar una solución fuera del orden anterior e inclusive nombrar tutor a una persona que no tenga relación de parentesco con el menor. En este caso, designará a la persona que muestre interés en hacerse cargo de él, prefiriendo a la que lo hubiera tenido a su cuidado.

Artículo 146. Para ser designado tutor de un menor de edad, se requerirá:

- 1) ser mayor de edad y estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos;
- 2) tener ingresos suficientes para sufragar los gastos del menor en cuanto sea necesario;

- 3) no tener antecedentes penales por delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud, ni por otros que a juicio del tribunal inhabiliten para ser tutor;
- 4) gozar de buen concepto público;
- 5) ser ciudadano cubano;
- 6) no tener intereses antagónicos con los del menor.

Artículo 147. (Modificado). Los directores de los establecimientos asistenciales o de los de educación o reeducación, y los jefes de las unidades militares o paramilitares, serán los tutores de los menores de edad que vivan en dichos establecimientos, o que pertenezcan a dichas unidades y no estén sujetos a patria potestad o tutela, con las mismas atribuciones que confiere el artículo 85 con respecto a la patria potestad. La representación ante los tribunales de los directores o jefes de unidades en su calidad de tutores, podrá ser delegada en un miembro del cuerpo jurídico de los respectivos organismos.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Disposición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 76 de 20 de enero de 1984).

Capítulo III

DE LA TUTELA DE LOS MAYORES DE EDAD INCAPACITADOS

Artículo 148. La tutela de los mayores de edad declarados incapacitados, corresponderá por su orden:

- 1) al cónyuge;
- 2) a uno de los padres;
- 3) a uno de los hijos;
- 4) a uno de los abuelos;
- 5) a uno de los hermanos.

Quando sean varios los parientes del mismo grado, el tribunal constituirá la tutela teniendo en cuenta lo que resulte más beneficioso para el incapacitado.

Excepcionalmente, cuando existan razones que lo aconsejen, el tribunal podrá designar tutor a persona distinta de las relacionadas anteriormente. En este caso, preferirá a quien tenga a su cuidado al incapaz o a quien muestre interés en asumir la tutela.

Artículo 149. Para ser designado tutor de un incapacitado se requerirá:

- 1) ser mayor de edad y estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos;
- 2) no tener antecedentes penales por delitos contra la propiedad o contra las personas o por otros que a juicio del tribunal inhabiliten para ser tutor;
- 3) gozar de buen concepto público;
- 4) ser ciudadano cubano;
- 5) no tener intereses antagónicos con los del incapacitado.

Artículo 150. A los directores de los establecimientos asistenciales se les considerará tutores de los mayores de edad incapacitados que se hallen internados en dichos establecimientos y que no estén sujetos a tutela, a los mismos efectos que para los menores establece el artículo 147.

Capítulo IV DEL EJERCICIO DE LA TUTELA

Artículo 151. El tutor representa al menor o incapacitado en todos los actos civiles o administrativos, salvo en aquellos que por disposición expresa de la ley, el tutelado pueda ejecutar por sí mismo.

Artículo 152. Los menores sujetos a tutela deben respeto y obediencia al tutor. Este podrá reprenderlos y corregirlos moderadamente.

Artículo 153. El tutor está obligado:

- 1) a cuidar de los alimentos del tutelado y de su educación si fuere menor;

- 2) a procurar que el incapacitado adquiriera o recupere su capacidad;
- 3) a hacer inventario de los bienes del menor o incapacitado y presentarlo al tribunal en el término que éste fije;
- 4) a administrar diligentemente el patrimonio del menor o incapacitado;
- 5) a solicitar oportunamente la autorización del tribunal para los actos necesarios que no pueda realizar sin ella.

Artículo 154. El tribunal, como órgano de tutela, podrá ordenar directamente el depósito del efectivo, las alhajas y otros bienes de elevado valor del menor o incapacitado.

También el tribunal podrá determinar los límites de disponibilidad de los fondos que tenga el tutelado en cuenta bancaria.

Artículo 155. El tutor necesitará autorización del tribunal para:

- 1) solicitar el auxilio de las autoridades al efecto de internar al tutelado en establecimiento asistencial o de reeducación;
- 2) realizar actos de dominio o cualquier otro acto que pueda comprometer el patrimonio del tutelado;
- 3) repudiar donaciones y herencias o aceptarlas, así como para dividir éstas u otros bienes que el tutelado poseyere en común con otros;
- 4) hacer inversiones y reparaciones mayores en los bienes del menor o incapacitado;
- 5) transigir o allanarse a demandas que se establezcan contra el menor o incapacitado.

Artículo 156. El tribunal no podrá autorizar al tutor para disponer de los bienes del menor o incapacitado sino por causa de necesidad o utilidad debidamente justificada.

Artículo 157. El ejercicio de la tutela es gratuito. El tutor podrá reembolsarse de los gastos justificados que

tuviere en el ejercicio de la tutela, previa aprobación del tribunal.

Artículo 158. El tutor debe informar y rendir cuenta de su gestión al tribunal por lo menos una vez al año, en la oportunidad que éste le señale. Deberá hacerlo, además, cuantas veces el propio tribunal así lo disponga. Asimismo, notificará al tribunal sus cambios de domicilio.

Artículo 159. Cuando el tutor, durante el ejercicio de la tutela, hubiere dejado de reunir los requisitos exigidos por este Código para su designación, o cuando incumpliere las obligaciones que le vienen impuestas, el tribunal, de oficio o a instancia del fiscal, dispondrá su remoción. Las personas a que se refiere el artículo 140 deberán poner en conocimiento del fiscal los hechos que a su juicio puedan determinar dicha remoción.

Artículo 160. Concluye la tutela:

- 1) por arribar el menor a la mayoría de edad, contraer matrimonio o por ser adoptado;
- 2) por haber cesado la causa que la motivó, cuando se trate de incapacitado;
- 3) por el fallecimiento del tutelado.

Artículo 161. Concluida la tutela, el tutor está obligado a rendir cuenta de su administración al tribunal. Igual obligación tiene el tutor que sea removido o los herederos del que haya fallecido.

Las cuentas de la tutela serán examinadas por el tribunal, el que les impartirá su aprobación o les hará los reparos y dispondrá los reintegros correspondientes.

Capítulo V DEL REGISTRO DE LA TUTELA

Artículo 162. (Modificado). En los tribunales encargados de fiscalizar la tutela se llevará un libro en el cual se tomará razón de las constituidas en su territorio.

(Este artículo quedó redactado en la forma que se consigna por la Ley No. 9 de 22 de agosto de 1977).

Artículo 163. (Modificado). Los libros estarán bajo el cuidado del secretario del tribunal o, en su caso, del secretario de la sección correspondiente, quien hará los asientos y expedirá las certificaciones.

(Este artículo quedó redactado de la forma que se consigna por la Ley No. 9 de 22 de agosto de 1977).

Artículo 164. El registro de cada tutela deberá contener:

- 1) el nombre, los apellidos, la edad y el domicilio del menor o incapacitado y las disposiciones que se hayan adoptado por el tribunal respecto al ejercicio de la tutela;
- 2) el nombre, los apellidos, la ocupación y el domicilio del tutor;
- 3) la fecha en que haya sido constituida la tutela;
- 4) la referencia al inventario de los bienes, que se llevará el expediente aparte con los recibos de depósitos y las limitaciones sobre operaciones en cuenta bancaria;
- 5) el centro de estudios, asistencial o de reeducación en que se halle internado el tutelado y los cambios de establecimiento que se realicen.

Artículo 165. Al pie de cada inscripción se hará constar, al comenzar el año, si el tutor ha rendido cuenta de su gestión. El tribunal del domicilio del tutor comunicará al del registro donde esté inscrita la tutela dichas rendiciones de cuentas, así como los particulares que varíen los datos de la inscripción practicada, con remisión de los documentos correspondientes.

Artículo 166. El tribunal examinará anualmente los registros de tutela, de lo que dejará constancia y adoptará las determinaciones que sean necesarias en cada caso para defender los intereses de las personas sujetas a ella.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las relaciones jurídicas constituidas al amparo de la legislación anterior conservarán la validez que la misma les haya conferido, pero sus efectos se regirán en lo adelante por las disposiciones de este Código.

Consecuentemente, para aplicar la legislación que corresponda, en los casos en que no esté expresamente determinado por este Código, se observarán las siguientes:

REGLAS

PRIMERA: Los matrimonios formalizados o reconocidos con anterioridad a la vigencia de este Código conservarán su validez y se probarán por los medios establecidos en la legislación anterior.

Aquellos matrimonios cuya formalización o reconocimiento se hubiere solicitado o promovido con anterioridad a la entrada en vigor de este Código y sobre los que no se hubiese hecho aún pronunciamiento definitivo, se regirán también por la legislación anterior.

En todo caso, las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges y los efectos del matrimonio respecto a sus hijos, se regirán por este Código.

SEGUNDA: Los matrimonios extinguidos o cuya extinción se haya promovido con anterioridad a la vigencia de este Código por causa de nulidad o divorcio y se hallen pendientes de resolución definitiva al entrar el mismo en vigor, se regirán por las disposiciones de la legislación anterior en cuanto a sus causas y efectos entre los cónyuges, pero sus efectos en cuanto a los hijos o a terceras personas, se atemperarán a las disposiciones de este Código conforme a las reglas subsiguientes. Los divorcios o nulidades de matrimonios que se promuevan en lo adelante se regirán por las reglas de este Código.

TERCERA: Las sociedades legales de gananciales cuya liquidación y participación se hubieren promovido antes de la vigencia de este Código, pero que se encuentren

pendientes de resolución definitiva, se liquidarán y partirán conforme a lo dispuesto en la legislación anterior, pero aquéllas cuya liquidación y participación aún no se hubiere promovido legalmente antes de la vigencia del presente Código, se regirán por las disposiciones con que el mismo regula la liquidación y participación de la comunidad matrimonial de bienes.

CUARTA: El régimen económico matrimonial adoptado mediante capitulaciones matrimoniales se ajustará a partir de la vigencia de este Código, a las disposiciones de éste.

El Registro de Capitulaciones Matrimoniales se mantendrá vigente al solo efecto de la publicidad de las capitulaciones formalizadas antes de la vigencia de este Código.

QUINTA: La patria potestad, guarda y cuidado conferidos y el régimen de comunicación de los padres con sus hijos menores regulados con anterioridad a la vigencia de este Código, conservarán la forma en que se hubiere dispuesto, pero se regirá en lo adelante por las reglas del mismo en lo referente a su ejercicio y variación.

SEXTA: Las pensiones alimenticias reclamadas judicialmente al amparo de la legislación anterior y aún no resueltas al entrar en vigor este Código, se resolverán conforme a lo dispuesto en éste. El pago de pensiones alimenticias dispuesto por resoluciones judiciales que hayan alcanzado su firmeza antes de la vigencia de este Código, será obligatorio, pero su variación se regirá en lo adelante por las disposiciones del mismo. La reclamación de las mensualidades devengadas, pero no percibidas, se regirá en lo adelante por las disposiciones de este Código en lo referente a su prescripción, pero si estuvieren reclamadas judicialmente, aunque no cobradas, el término de su prescripción será el de la legislación anterior.

SÉPTIMA: Las adopciones formalizadas antes de la vigencia de este Código generarán los derechos hereditarios que el mismo establece entre adoptado y adoptante y

los descendientes de éste, si alguno de ellos fallece después de la vigencia de este Código.

OCTAVA: Los hijos cuya filiación haya sido declarada o reconocida antes de la vigencia de este Código, tendrán a partir de ésta, iguales derechos que el mismo reconoce a los hijos matrimoniales. Iguales derechos tendrán los hijos cuya filiación esté pendiente de reconocimiento o de declaración judicial al entrar en vigor este Código, una vez que les sea reconocida o declarada dicha filiación.

NOVENA: La tutela de cualquier clase deferida e inscrita con anterioridad a la vigencia de este Código, se mantendrá, si bien cesarán en sus cargos los protutores, presidentes y vocales de los Consejos de Familia, y éstos quedarán disueltos. El tutor quedará sometido, en lo adelante, a las reglas de este Código en relación al ejercicio de sus funciones y a su control, cesación y remoción.

DÉCIMA: Las fianzas constituidas por tutores que se encuentren en posesión del cargo con anterioridad a la vigencia de este Código, no se devolverán mientras el tutor permanezca desempeñándolo, y sólo se lo devolverán, en la cuantía que procediere según la legislación anterior, al término de su gestión.

DÉCIMO PRIMERA: Los tribunales que tuvieran inscritas en sus Registros tutelas constituidas con anterioridad a la vigencia de este Código, actualizarán dichas inscripciones de conformidad con lo dispuesto en el mismo.

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular regulará la forma en que se llevará a efecto dicha actualización.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se modifica el artículo 320 del Código Civil que queda redactado así:

“Artículo 320. La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos.

”El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por la Ley”.

SEGUNDA: Se derogan:

- 1) El Título IV (Del Matrimonio); el Título V (De la Paternidad y Filiación); el Título VI (De los Alimentos entre Parientes); el Título VII (De la Patria Potestad); el Título IX (De la Tutela) y el Título X (Del Consejo de Familia), todos del Libro Primero del Código Civil.
- 2) La Sección Octava (De los Derechos Hereditarios de los Hijos Ilegítimos) del Capítulo II; la Sección Segunda (Del Parentesco) del Capítulo III; la Sección Tercera (De la Herencia de los Hijos Naturales Reconocidos) del Capítulo IV, todos del Título III, del Libro Tercero del Código Civil.
- 3) El Capítulo I (Disposiciones Generales); los artículos desde el 1327 hasta el 1333, ambos inclusive, del Capítulo II (Donaciones por Razón del Matrimonio); el Capítulo III (De la Dote); el Capítulo IV (De los Bienes Parafernales); el Capítulo V (De la Sociedad de Gananciales) y el Capítulo VI (De la Separación de los Bienes de los Cónyuges y de su Administración por la Mujer durante el Matrimonio), todos del Título III, del Libro Cuarto del Código Civil.
- 4) El inciso primero del artículo 1966 del Código Civil (de la prescripción de la acción para reclamar el pago de pensiones alimenticias).
- 5) La Ley de 19 de junio de 1916 (referente a la mayoría de edad y a la emancipación de los hijos; *Gaceta Oficial*, No. 145, de 21 de junio; página 11793).
- 6) La Ley de 18 de julio de 1917 (relativa a los bienes parafernales; *Gaceta Oficial*, No. 19, de 23 de julio; página 1205).
- 7) El Decreto Presidencial No. 1135, de 18 de agosto de 1917 (que dictó el Reglamento del Registro Nacional de Capitulaciones Matrimoniales; *Gaceta Oficial*, No. 44, de 21 de agosto; página 2933).

- 8) La Ley de 29 de julio de 1918, excepto su artículo I (modificativa del régimen legal del matrimonio; *Gaceta Oficial*, No. 31, de 6 de agosto; copia corregida; página 1953).
- 9) El Decreto-Ley No. 206, de 10 de mayo de 1934 (contentivo del régimen legal del divorcio; *Gaceta Oficial*, Extraordinaria, No. 45, de 11 de mayo).
- 10) El Decreto-Ley No. 739, de 4 de diciembre de 1934 (modificativo de los artículos 15, 24 y 62 del Decreto-Ley No. 206, de 10 de mayo de 1934; *Gaceta Oficial*, No. 134, de 8 de diciembre; página 10121).
- 11) El Decreto-Ley No. 740, de 4 de diciembre de 1934 (que autorizó a solicitud de parte, la disolución del vínculo matrimonial en los divorcios promovidos al amparo del Código Civil; *Gaceta Oficial*, No. 134, de 8 de diciembre; página 10122).
- 12) La Ley No. 129, de 3 de mayo de 1935 (respecto a la representación de los menores por el Ministerio Fiscal al solo efecto de completar la capacidad civil; *Gaceta Oficial*, Extraordinaria, No. 40, de 4 de mayo).
- 13) La Ley No. 9, de 20 de diciembre de 1950 (sobre equiparación civil de la mujer; *Gaceta Oficial*, No. 302, de 28 de diciembre, página 27553).
- 14) Los artículos 3 y 5 de la Ley No. 1215, de 27 de octubre de 1967 (referente a los actos del Registro del Estado Civil; *Gaceta Oficial*, No. 7, de 9 de noviembre; página 65).
- 15) Las leyes, leyes-decretos, decretos-leyes, acuerdos-leyes, órdenes militares, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales, en todo cuanto se opongan al cumplimiento de lo que se dispone en el presente Código.

TERCERA: Este Código comenzará a regir a partir del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, del presente año.

POR TANTO: Mando que se cumpla y ejecute la presente Ley en todas sus partes.

DADA en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 14 días del mes de febrero de 1975.

Oswaldo Dorticós Torrado

Fidel Castro Ruz
Primer Ministro

Armando Torres Santrayll
Ministro de Justicia

Índice

Presentación / V

LEY No. 1289, CÓDIGO DE FAMILIA / 1

Título Preliminar. De los Objetivos de este Código / 3

Título I. Del Matrimonio / 4

Capítulo I. Del Matrimonio en General / 4

Sección Primera. Del Matrimonio y de su Constitución / 4

Sección Segunda. De la Formalización del Matrimonio / 6

Sección Tercera. Del Matrimonio no Formalizado / 7

Sección Cuarta. De la Prueba del Matrimonio / 8

Capítulo II. De las Relaciones Conyugales / 9

Sección Primera. De los Derechos y Deberes entre
Cónyuges / 9

Sección Segunda. Del Régimen Económico
del Matrimonio / 10

Sección Tercera. De las Cargas y Obligaciones
de la Comunidad Matrimonial de Bienes / 11

Sección Cuarta. De la Administración de la Comunidad
Matrimonial de Bienes / 12

Sección Quinta. De la Disolución y Liquidación
de la Comunidad Matrimonial de Bienes / 13

Capítulo III. De la Extinción del Matrimonio / 15

Sección Primera. Disposiciones Generales / 15

Sección Segunda. De la Presunción de Muerte del
Cónyuge / 15

Sección Tercera. De la Nulidad del Matrimonio / 16

Sección Cuarta. Del Divorcio / 17

Título II. De las Relaciones Paterno-Filiales / 21

Capítulo I. Del Reconocimiento de los Hijos / 21

Sección Primera. Del Reconocimiento y su Inscripción / 21

Sección Segunda. De la Presunción de la Filiación / 21

Sección Tercera. De la Impugnación del Reconocimiento / 22
Capítulo II. De las Relaciones entre Padres e Hijos / 23
Sección Primera. De la Patria Potestad y su Ejercicio / 23
Sección Segunda. De la Guarda y Cuidado y de la Comunicación entre Padres e Hijos / 25
Sección Tercera. De la Extinción y Suspensión de la Patria Potestad / 26
Capítulo III. De la Adopción / 28
Título III. Del Parentesco y de la Obligación de Dar Alimentos / 33
Capítulo I. Del Parentesco / 33
Capítulo II. De la Obligación de Dar Alimentos / 34
Título IV. De la Tutela / 38
Capítulo I. Disposiciones Generales / 38
Capítulo II. De la Tutela de los Menores de Edad / 40
Capítulo III. De la Tutela de los Mayores de Edad Incapacitados / 41
Capítulo IV. Del Ejercicio de la Tutela / 42
Capítulo V. Del Registro de la Tutela / 44
Disposición Transitoria / 46
Disposiciones Finales / 48

